



“Rostro femenino”
Sanguina sobre papel (25 x 35 cm)
2007

Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones

Preliminary Notes on Civilian Resistance in Warlike and Dealing Contexts

Sumario: Introducción. 1. Un solo operador de orden y violencia. 1.1 La esfera de las intermediaciones. Transacciones y pactos paradójicos. 1.2 Los discursos bifrontes y combinados. 2. En un contexto de competencia de operadores. 2.1 La disyuntiva: huir o aparecer en público. 2.2 Los dilemas y ambigüedades de la retórica pacifista. 2.3 De los discursos pacifistas a la acción colectiva.

Resumen: El artículo discute sobre las resistencias de los grupos subordinados en contextos de guerra y luchas por la soberanía. Interesa mostrar que los dominios y controles de los operadores de violencia no logran imponer sus mandatos y prohibiciones completamente sobre la población, y más bien generan diversas formas de resistencia que pueden expresarse como oposición abierta, contestataria y rebelde, o formas sutiles, ocultas de difícil aprehensión. Estas formas no ortodoxas de resistencia social en contextos locales o territorios de conflicto abierto son abordadas a partir de dos escenarios: el primero, caracterizado por la existencia de un solo operador de orden y violencia, con una precaria presencia institucional; el segundo, marcado por la competencia de operadores de violencia en el que la presencia institucional además de precaria, es también bélica e intermitente.

Palabras clave: Resistencia civil; Conflicto armado; Acción colectiva

Abstract: This article discusses the resistance placed upon by subordinate groups in warfare contexts and struggle for sovereignty. The paper aims at showing that the violence operator's domains and controls do not achieve the complete imposition of their mandates and bans over the population, but instead it generates different kinds of resistance expressed as open, protesting and anti-establishment opposition, or like subtle, hidden and difficult to capture forms. These nonorthodox kinds of social resistance in local contexts or open conflict territories, are undertaken from two scenarios: the first characterized by the existence of only one violence and order operator, with an unstable institutional presence; the second marked by the rivalry of violence operators which institutional presence apart from being unstable is belligerent and intermittent.

Key words: Civilian resistance; Armed conflict; Collective action

Artículo recibido: diciembre de 2006. **Aprobado:** diciembre de 2006

María Teresa Uribe de Hincapié: Socióloga. Magíster en Planeación Urbano Regional. Profesora de la Maestría en Ciencia Política. Directora del grupo de investigación *Estudios Políticos*.

Correo electrónico: penélope@une.net.co

Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones*

María Teresa Uribe de Hincapié

Introducción

Este texto es el resultado de un seguimiento detallado —aunque todavía incompleto— de las maneras como los grupos subordinados, o si se quiere las gentes del común, enfrentan situaciones límite propiciadas por los despliegues del conflicto armado y de las formas diferenciales de violencia. El horizonte analítico que aborda es el de escenarios locales como municipios, zonas rurales y barrios periféricos de las grandes ciudades, en los que se indaga cómo resisten estos sujetos colectivos a los diversos operadores de violencia y de qué manera estas resistencias contribuyen a redefinir tanto los órdenes locales, como las dinámicas de la confrontación armada.

Interesa destacar que los dominios y los controles de los operadores de orden y violencia — sean institucionales, contrainstitucionales o parainstitucionales— nunca logran imponerse del todo sobre la población y siempre encuentran formas de resistencia entre las personas. Éstas van desde la oposición abierta, contestataria y rebelde, hasta formas más sutiles, menos visibles, no siempre públicas y difíciles de

* Este artículo hace parte del proyecto de investigación *Las palabras de la guerra: la guerra por la soberanía*, realizado por el grupo de investigación Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Contó con el apoyo financiero del Comité para el Desarrollo de la Investigación —CODI— y de la Estrategia de Sostenibilidad 2005-2007, constituye una segunda parte del proyecto *Las metáforas de la guerra. Un estudio de los lenguajes políticos presentes en las guerras civiles del siglo XIX en Colombia*. Ha contado con la participación de la profesora Liliana María López Lopera, como coinvestigadora, y de Jonny Alexander Giraldo Jurado como estudiante en formación.

aprehender, pasando por una gama muy compleja de acciones colectivas en las cuales se expresa la inconformidad con una situación agobiante y opresiva; en otras palabras; los poderes verticales y autoritarios no son tan eficaces como se podría pensar para imponer sus mandatos y prohibiciones, y requieren transacciones de diversa naturaleza con actores sociales heterogéneos, en las cuales se pueden explorar formas de resistencia poco ortodoxas y no siempre cívicas o pacifistas.¹

Las teorías sobre la resistencia social se han inscrito en dos arquetipos clásicos: el del rebelde que busca emanciparse de la opresión (línea de Hobsbawm) y el del ciudadano virtuoso y cívico que obedece la ley y usa la protesta pública para rechazar el ejercicio ilegal de la fuerza (línea de Habermas). Estos dos arquetipos, aunque presentes también en el contexto colombiano, no son los que se discutirán en este trabajo; más bien, se explorarán algunas formas no ortodoxas de resistencia, no siempre pacifistas, a veces ilegales y definitivamente menos románticas que las del rebelde que se emancipa y menos cívicas que las del ciudadano republicano.

En este artículo se indagará qué hacen las personas en contextos de conflicto agudo y violencia extrema para sobrevivir, para garantizar su subsistencia y la de su familia, para continuar con sus quehaceres domésticos y laborales, para transitar y trasladarse de un lugar a otro, para relacionarse con los operadores de violencia, con los funcionarios públicos, con las organizaciones sociales, con sus vecinos y sus amigos; en fin, cómo logran subsistir en ambientes totalmente hostiles y abiertamente peligrosos. Se intuye que las estrategias puestas en práctica por los subordinados en situaciones abiertamente conflictivas, pueden develar formas de resistencia social que si bien no suponen un desafío explícito a los operadores de violencia o a quienes se benefician del orden impuesto por ellos, sí expresan un cuestionamiento implícito a poderes arbitrarios, excluyentes y autoritarios.

Precisamente en las interacciones múltiples y diferenciadas que se establecen entre los operadores de violencia y las gentes que habitan territorios de conflicto abierto, es donde se hace posible explorar lo que hemos llamado *formas no ortodoxas de resistencia social*; en otras palabras, el ejercicio de dominio impuesto por los operadores de violencia se sustenta sobre una red bien nutrida de micronegociaciones, transacciones y cruces, acuerdos contingentes, alianzas transitorias y rupturas intermitentes que resultan medianamente eficaces para los pobladores y que le ponen límites al accionar de los operadores de violencia. Este entrecruzamiento de dominios

1 Sobre la formación de órdenes de dominación y órdenes de la resistencia, véase: William Roseberry. "Hegemonía y lenguaje contencioso". En: Joseph Gilbert M. y Daniel Nugent. *Aspectos cotidianos de la formación del Estado mexicano*. México, Era, 2000, pp. 213 y ss.

y resistencias modifica los órdenes institucionales de las localidades y afecta la dinámica y el despliegue del conflicto armado.²

Para abordar estas formas de resistencia no ortodoxa en contextos locales, se analizarán, de manera sintética, dos grandes escenarios: por un lado, aquellos donde existe un solo operador de violencia y una presencia institucional precaria; por otro, aquellos donde se escenifica una competencia de operadores de violencia con una presencia institucional también precaria, pero predominantemente bélica e intermitente.

1. Un solo operador de orden y violencia

Cuando existe un solo operador de orden y violencia la estrategia de los pobladores parece ser la del *acomodamiento*, aceptando formalmente el operador, bien sea éste un grupo guerrillero, uno paramilitar o una fuerza de seguridad del Estado. Las personas se someten al orden impuesto por éste y no expresan de manera pública su rechazo o inconformidad. Ellas, incluidos funcionarios públicos del nivel local, alcaldes y concejales, acatan en apariencia los mandatos y prohibiciones emanados del operador, en algunos casos porque no tienen otra alternativa, en otros porque existe una suerte de sentimiento moral que los aproxima con el operador en tanto que identifican similares enemigos; pero, en la mayoría de los casos, porque la presencia del operador les garantiza orden, predecibilidad, disminución de la incertidumbre y, en cierta medida, garantía y protección para sus vidas y bienes. En suma, se acepta al operador no sólo porque ejerce su dominio a sangre y fuego, sino porque ofrece seguridad frente a otros operadores o frente a actores delincuenciales menores; a su vez, la oferta de seguridad y protección es la estrategia de los operadores para encontrar algún arraigo sin el cual sería prácticamente imposible su permanencia en el ámbito local.³

2 Sigo en este análisis las tesis generales de James C Scott. *Los dominados y el arte de la resistencia*. México, Era, 2000, p. 44.

3 No debe pasarse por alto, como advierte William Pérez Toro, que las poblaciones afectadas por la guerra son objeto de diversas criminalizaciones por parte de los operadores de orden y violencia: la del Estado, la de las guerrillas y la de los paramilitares. “Distantes en sus proyectos de sociedad (políticos), estos órdenes muy probablemente, y en no pocos casos, coinciden en el reproche de conductas (evasión de impuestos, traición, consumo de sustancias prohibidas, circulación en horarios y por lugares prohibidos, corrupción...) y en la persecución de sujetos (vagos, prostitutas, drogadictos, ladrones, colaboradores...). Véase: William Fredy Pérez Toro. “Guerra y delito en Colombia”. *Estudios Políticos*, 16. Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, enero-junio de 2000, p. 38.

Demanda y oferta de seguridad constituyen el punto de encuentro entre operador y grupos subalternos; allí se anuda un pacto implícito entre ambos que se mantiene en tanto que la ilusión de seguridad sea sostenible. Sin embargo, aquello que aparece como dominación en el ámbito de lo público, presenta algunas restricciones en la esfera de lo cotidiano-doméstico, donde la estrategia de acomodamiento no es equivalente a sometimiento. Los pobladores saben que sus derechos y libertades son precarios y de una inmensa vulnerabilidad en contextos de conflicto armado prolongado, saben que al estar sometidos a poderes arbitrarios y violentos en cualquier momento y por razones nimias pueden sufrir el destierro, los interrogatorios, las golpizas, las humillaciones públicas y hasta la muerte; y que la desobediencia o la sospecha los puede convertir en víctimas de muy diversas depredaciones. A pesar de la eficacia del terror agenciada por los operadores de violencia, las personas se la ingenian para desplegar unas estrategias que, siguiendo a James C. Scott, podríamos llamar de *infrapolítica*,⁴ es decir, una serie de formas de resistencia muy variadas entre las cuales está la falsa sumisión, el incumplimiento pasivo, la ignorancia fingida, la difusión de rumores, el engaño deliberado, la burla, la risa, los chismes; en suma, eso que llama el autor *el discurso oculto*⁵ producido a partir del sufrimiento y que representa una crítica a los poderes autoritarios, pero de espaldas al dominador. Se trata de prácticas a menudo ignoradas, no visibles y de cierta forma ilegibles, pues transcurren por el mundo difícilmente aprensible de la cotidianidad y, aunque tienen como propósito principal la inmediata búsqueda de la supervivencia, en ellas subyace una lucha por la autonomía y por la independencia de todo poder autoritario legal o ilegal.

Los operadores de violencia, a pesar de disponer de muchos recursos violentos para someter por la fuerza a los grupos subordinados, manejan también una estrategia de discurso oculto mediante la cual se presentan como agentes necesarios para el colectivo social, interesados por su seguridad y bienestar; y como representantes de intereses comunitarios sentidos y deseados por los pobladores, su oferta de orden y seguridad y la autorrepresentación que se abrogan, los impele a actuar como si fuesen la autoridad y a otorgar algunos beneficios. De esta forma, dominador y dominados actúan en público “como si”, proyectando una imagen de dominio y sumisión, aunque en privado sus posturas y acciones sean bien diferentes, lo que da paso a transversalidades poco visibles pero efectivas. En la coimplicación de discursos ocultos se abren ciertas brechas, pequeñas fisuras que les permiten a los subordinados poner algunos límites a los poderes autoritarios y obtener de ellos beneficios personales o colectivos en

4 *Ibíd.*, pp. 45 y ss.

5 *Ibíd.*

situaciones que parecen totalmente cerradas a cualquier posibilidad de resistencia social.

1.1 La esfera de las intermediaciones. Transacciones y pactos paradójicos

La estrategia del acomodamiento conduce, por la vía de la coimplicación de discursos ocultos, a la intermediación entre operadores y subordinados, asunto que ha sido descrito en muchos trabajos de investigación sobre conflicto armado.⁶ Cuando las guerrillas actúan en zonas de colonización o en territorios como un operador único de violencia, además de ofrecer orden y seguridad a los pobladores, se convierten en intermediarios para la consecución de empleo, para presionar a los empresarios del entorno a elevar salarios o a pagar prestaciones sociales, o para que los funcionarios municipales realicen inversión social y construcción de obras públicas en territorios bajo su control. Los operadores de violencia, en su condición de intermediarios, pueden ser requeridos también para solucionar diversas tensiones comunitarias que van desde las domésticas (control de maridos o mujeres infieles e hijos desobedientes) hasta las relaciones de mercado (compra de cosechas o pago de deudas, permisos para distribuir licor y otros productos), pasando por beneficios políticos en el campo electoral.⁷

Estas prácticas de intermediación no son exclusivas de las guerrillas en las zonas rurales, pues también recurren a ellas milicias urbanas en los barrios de Medellín, bandas delincuenciales⁸ y, más recientemente, grupos paramilitares que, en su condición de intermediarios, actúan como si fuesen autoridades que además de

6 Utilizamos el concepto de *pactos paradójicos* desarrollado por Francisco Gutiérrez Sanín y Ana María Jaramillo. Véase, de estos autores: “Esmeralderos en Boyacá y milicias populares en Medellín”. En: Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (editores). *Emancipación social y violencia en Colombia*. Bogotá, Norma, 2004, pp. 211 y ss.

7 Existe una amplia literatura sobre las prácticas sociales de la guerrilla en zonas dominadas por ellos. Véase, entre otros: Graciela Uribe. *Veníamos con una manotada de ambiciones. Un aporte a la colonización del Caquetá*. Bogotá, Unilibros, 1998; María Teresa Uribe de Hincapié. *Urabá: región o territorio*. Medellín, Copourabá, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, 1992; Mario Aguilera. “La justicia guerrillera”. En: Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (editores). *Caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Uniandes, Siglo del Hombre, 2001. Y en esta misma compilación, véase también el texto de Alfredo Molano. “La justicia guerrillera”.

8 Véase: Ana María Jaramillo *et al.* *En la encrucijada. Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*. Medellín, Corporación Región, 1998.

imponer orden, vigilar y castigar, promueven la organización de grupos asociativos y de programas microempresariales, la participación comunitaria para el mejoramiento de los barrios; controlan las acciones comunales, entran en relación con funcionarios públicos de muy diversa naturaleza y hacen llegar dineros públicos a los colectivos más desprotegidos. La intermediación implica interacciones entre dominadores y dominados, obliga a la transacción, a la búsqueda de acuerdos y negociaciones, y al establecimiento de ciertas reciprocidades asimétricas y precarias que hacen posible alguna forma de resistencia social.

La intermediación armada es la otra cara de los operadores de violencia, es su discurso oculto, y es allí donde se configuran las fisuras y las grietas de las dominaciones autoritarias, donde se escenifican las transacciones y los acuerdos contingentes y donde los grupos subalternos no solamente logran algunos beneficios sino que despliegan formas de resistencia mediante las cuales —y actuando “como si”—, van ganando espacios no suficientemente controlados por los operadores de violencia, espacios en los que, en medio de la mayor hostilidad, pueden ir construyendo alguna forma de autonomía, independencia y organización que pone en cuestión la solidez, la permanencia y la verticalidad de las relaciones autoritarias.

Según Tarrow, las fisuras y las grietas que se abren en los órdenes políticos dominantes son precisamente las que permiten despliegues muy significativos de la acción colectiva de los subordinados o los agraviados.⁹ Aunque en contextos de violencia extrema o de guerra es más difícil que estas grietas se produzcan porque el uso de la fuerza bruta del titular o de quien lo sustituye las subsanaría de inmediato, la intermediación armada con sus estrategias de transacción y acuerdos contingentes contribuye a erosionar el poder autoritario y las fisuras y grietas se mantendrán en la medida en que el discurso oculto de los subordinados se mantenga vigente, es decir, en la medida en que siga operando el “como si”. Este equilibrio precario y catastrófico sólo se rompe cuando entran en competencia nuevos operadores —con sus respectivos instrumentos de inteligencia—, o cuando las estrategias gubernamentales de control del orden público cambien: bien porque se llegue a acuerdos de paz y desarme con el operador ilegal de violencia, bien porque se pongan en operación estrategias de comprometimiento de los subordinados en labores de inteligencia, como las redes de informantes y cooperantes adoptadas por el gobierno de Uribe.

Con la operación de los cooperantes e informantes es posible esperar el despliegue de nuevos ciclos de violencia y el incremento de los homicidios, con la

9 Sidney Tarrow. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza, 1994, pp. 16 y ss.

consecuente reducción de los pequeños espacios autonómicos ganados por los subordinados, lo que implica que las estrategias de acomodamiento y el discurso oculto que las acompaña pierdan eficacia y se haga necesario imaginar otras formas de resistencia o reinventar las anteriores. Cuando se ponen en ejecución procesos de negociación y acuerdo con el operador de violencia, suele ocurrir que los dominados empiecen a expresar de manera pública sus desacuerdos con el operador de violencia, a reclamarle y a disminuir asimetrías entre unos y otros; esta última ha sido la experiencia vivida en algunos barrios de la ciudad de Medellín, donde los paramilitares reinsertados, pese a conservar amplios recursos de violencia y el halo de terror que crearon en torno suyo, se han visto confrontados de manera directa con los pobladores, en asambleas comunitarias y reuniones barriales en las que estos, con muchas precauciones y paulatinamente, hacen público su discurso oculto, abandonan el disfraz y el “como si” y ganan autonomía y dignidad.¹⁰ Son pocos los que se arriesgan, podría tratarse incluso de individualidades; sin embargo los demás subordinados y agraviados perciben que esos reclamos públicos se hacen también en su nombre, lo que le otorga carácter colectivo a estas variaciones en las estrategias de resistencia.

Si en este contexto los subordinados pueden ampliar a su favor las brechas y las fisuras del orden autoritario despojándose del disfraz, los dominadores —en este caso, los paramilitares— se ven abocados a acentuar “el como si”, a representar en público el nuevo estatus que les ha sido asignado en la negociación y a cambiar los espacios y los procedimientos de acción tradicionales. En este contexto suele suceder que disminuyen las tasas de criminalidad y que los operadores reducen sus acciones depredadoras, aunque se mantiene en el horizonte la posibilidad abierta del retorno a las viejas prácticas, posibilidad que condiciona también la apertura de nuevos espacios autonómicos.

Esto quiere decir que los procesos bélicos y de violencia son dinámicos y cambiantes, que la guerra no siempre es la misma aunque la imagen que proyecta sea la de una repetición infinita que “no pasa”, y que la sociedad que la soporta tampoco actúa de la misma manera frente a ella. Los contextos cambian y se transforman de una manera a veces vertiginosa, lo que implica para los subordinados que su “caja de herramientas” culturales y sociales se tiene que estar renovando, inventando de nuevo, readaptando, resignificando sus maneras de ser, de comportarse y de adaptarse —acomodarse y aprender. Quizá esta capacidad de rápidas adaptaciones y cambios es la estrategia más eficaz para sobrevivir en entornos violentos y degradados.

10 Entrevistas personales a pobladores de la comuna 13 de Medellín. Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, mayo de 2006.

1.2 Los discursos bifrontes y combinados

El escenario de un solo operador de violencia es un recurso analítico para desentrañar la particularidad de las estrategias de resistencia de los subordinados, pero en la práctica, aunque exista un dominio más o menos hegemónico de un solo operador, siempre hay al menos un segundo que gravita sobre las gentes de la localidad, el barrio o la vereda; no se trata todavía de la competencia de operadores —que se abordará en el siguiente apartado— sino de un otro, distante pero copresente, representado por la burocracia estatal, armada o administrativa, pero externa al entorno local. En algunas oportunidades más frecuentes de lo aceptado, se presentan alianzas paradójicas entre operadores legales e ilegales, inscritas también en la densa red de transacciones y acuerdos que se describieron antes y que contribuyen a abrirle fisuras y escapes al orden dominante.¹¹

La situación que interesa examinar ahora es cuando se presenta esa doble gravitación porque los operadores de violencia que representan al Estado, al contra o al para Estado, mantienen distancias, separaciones y órbitas relativamente independientes para su accionar; en estos casos, que también son cambiantes y están sujetos a variaciones, la estrategia de discurso oculto de los dominados se tiene que volver bifronte y combinada, tiene que adoptar varios códigos y diversos recursos para que las personas puedan relacionarse con unos y otros; bien mediante dos discursos ocultos pero distintos, o bien mediante una combinación de discurso oculto para el operador violento ilegal y otro público para ponerse en contacto con el constitucional.¹²

Ese otro lejano pero copresente, el institucional-legal, también ofrece una gama de servicios para los subordinados que va desde la oferta de seguridad hasta la oferta de diferentes servicios y bienes de consumo colectivo; se trata de un esquema pluridireccional en el cual los subordinados eligen selectivamente qué le demandan a quién y cuál de los operadores es más eficiente para cada objeto particular. Para la obtención de seguridad es posible que se confíe más en el operador ilegal que en el legal, por varias razones: porque se lo percibe más eficaz, dada su permanencia en el entorno local, mientras que la presencia del operador legal puede ser intermitente y esporádica;¹³ o porque la garantía de seguridad de los subordinados con el operador

11 María Teresa Uribe de Hincapié. “La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades”. En: Adriana Barrios (compiladora). *Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social*. Bogotá, Tercer Mundo, 1997, pp. 167 y ss.

12 *Ibíd.*

13 Me refiero a operativos militares y policiales que se despliegan en persecución del operador ilegal y sus supuestos colaboradores, pero que no conllevan una presencia permanente de la fuerza pública en el entorno.

ilegal se sustenta en un pacto implícito de lealtad que supone el silencio frente a eventuales contradictores y la ruptura de ese pacto implícito puede romper el equilibrio precario y destruir las ventajas del discurso oculto.

Para todos los operadores de violencia, los grupos subordinados generan desconfianza, por eso intentan evitar, usando el terror y la violencia, las fugas de información o las colaboraciones con el enemigo en términos de apoyo para guardar armas, ofrecer alimentos o abastecimientos, otorgar refugios u otros pequeños servicios. Los subordinados, por su parte, conocen las desconfianzas que gravitan sobre ellos y actúan con códigos distintos, sin que ello signifique necesariamente un rechazo al orden institucional, una postura antiestatista ni una identidad ideológica con los operadores ilegales de violencia; se trata de formas de resistencia en situaciones donde lo más racional parece ser operar con un discurso oculto pero bifronte.

Para acceder a los bienes públicos colectivos o a los beneficios sociales, los subordinados acuden al operador institucional no armado más reconocido por su eficiencia en ese aspecto y, en algunas ocasiones, el argumento de la presencia del operador armado en el entorno resulta benéfico para los subordinados, en tanto atrae inversión pública hacia la localidad, programas sociales, recursos asistenciales, presencia institucional que de otra manera les sería esquiva. La llegada de nuevos recursos puede venir acompañada de otros intermediarios y/o de la disputa entre intermediarios para manejarlos, con lo cual se amplía el panorama de las transacciones en un abanico amplio de posibilidades pero también de riesgos, en la medida en que cambian las posiciones de todos.

Con los operadores institucionales no armados se requiere otro tipo de estrategias: el discurso se vuelve público y la acción colectiva también, además, se necesitan otros aprendizajes, hablar en el lenguaje del Estado y de la ley, lo que implica aprender a presentar proyectos, solicitudes de ayuda, demandas, tutelas, recursos y conocer cómo se mueve esa amplia fronda burocrática del aparato para identificar qué se le puede solicitar a quién, en qué momento hacerlo, con qué retórica legalista o con cuáles prácticas participativas. En este contexto, se expresa también el discurso bifronte, el oculto y el público, lo que implica que los subordinados se mueven en una frontera difusa entre lo legal y lo ilegal, entre el Estado y el operador armado con sus respectivas transacciones. Los pobladores entran y salen de la legalidad de acuerdo con las estrategias que resulten más eficaces para cada situación. Cuando la coyuntura así lo indica, aparece el ciudadano virtuoso, cívico, participativo que cumple la ley; cuando las circunstancias cambian aparece el poblador que transa con el delito, que encubre al perpetrador, que despliega acciones disruptivas y a veces violentas, y que fuerza los límites entre lo permitido y lo prohibido.

2. En un contexto de competencia de operadores

Cuando en un entorno local existen varios operadores de violencia se escenifica una disputa brutal por el control territorial, por las organizaciones sociales que operan en esos espacios, por la cooptación de las autoridades institucionales y por la captación de recursos y rentas públicas y privadas. El contexto se torna más complejo y oscuro cuando existen más de dos operadores de violencia, cuando alguno de ellos se fragmenta y aparece otra organización con la misma divisa o cuando se configuran alianzas paradójicas entre varios operadores de diferente signo, entre alguno de ellos con la delincuencia organizada como el narcotráfico, con el ejército, con la policía, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros.¹⁴

En estas situaciones la estrategia del acomodamiento deja de ser eficaz y los discursos ocultos no son suficientes para proteger la vida y los bienes de los subordinados; el silencio y el actuar “como si” deja de ser posible porque los operadores de violencia, incluido el Estado, presionan las lealtades de los pobladores y exigen una adscripción pública y comprometida con su grupo, o porque desde posturas autoritarias y verticales los operadores deciden quién es el amigo y el enemigo, quién puede ser confiable o sospechoso; es decir, propician desde el poder una polaridad en la que cada vez es más difícil mantenerse por fuera de las adscripciones reales o imaginadas por los operadores, y que trae consigo situaciones de violencia generalizada de la cual no parece posible escapar.

Frente a esta situación límite, el discurso oculto se vuelve insostenible, las transacciones con unos implica situarse en la condición de enemigos de los otros, las sospechas se incrementan, las desconfianzas se multiplican, las venganzas por agresiones anteriores o maltratos del viejo operador se multiplica y el mundo deja de ser predecible o legible para los subordinados. Siempre queda el recurso de la huída, del desplazamiento forzado, que si bien es una imposición violenta de los nuevos conquistadores del territorio, también constituye una vieja y conocida estrategia de las personas para salvar sus vidas.¹⁵

14 Existe una amplia literatura sobre lo que se ha llamado “la generalización del conflicto”, que asume su forma más compleja con el despliegue de las organizaciones militares. Sobre este aspecto véase: Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez. *Violencia política en Colombia. De la Nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, Cinep, 2003.

15 Sobre el desplazamiento forzado en las décadas más recientes existe una bibliografía muy extensa, pero para el momento más álgido de la competencia de operadores, véase: Consejería para el desplazamiento y los derechos humanos (CODHES). *Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*. Bogotá, Ediciones Guadalupe, 1999.

2.1 La disyuntiva: huir o aparecer en público

La disyuntiva para los subordinados es huir o aparecer en público y desplegar acciones colectivas y formas de organización mediante las cuales se pretende tomar distancia de los operadores —cualesquiera que ellos sean— y situarse en el espacio imaginario de una autonomía virtual pero permanentemente amenazada. Esto quiere decir que los subordinados, si pretenden mantenerse en sus entornos, se ven abocados a la adopción de discursos públicos, a la acción colectiva y a encontrar nuevas estrategias mediante las cuales defender la vida.

El discurso oculto permanece en los márgenes, y pasa a predominar un discurso público que podríamos caracterizar como pacifista y cívico; se realizan movilizaciones, marchas, concentraciones en lugares públicos y diversas acciones simbólicas de rechazo a la violencia y contra la guerra pero, como dice Mauricio García, “sin destinatario conocido”;¹⁶ es decir, no se protesta contra el o los operadores de violencia, sino contra una situación agobiante donde “la guerra” —así, en abstracto— sustituye la obligación de nombrar, de decir, de acusar, de señalar; es una suerte de eufemismo para nombrar el dolor y el sufrimiento sin arriesgarse a señalar a los actores responsables del mismo. El discurso público mantiene, pues, rasgos de las prácticas anteriores de ocultamiento que, en lo fundamental, se proponen evitar confrontaciones directas, pero al situar la guerra como la gran causa, contribuyen a reforzar la noción de un destino trágico e inevitable, *cuasi* natural, del cual no se sabe muy bien cómo salir.

La retórica pacifista enunciada en estas acciones y movilizaciones colectivas apela, por lo general, a valores humanos universales: la defensa de la vida y de la dignidad, la seguridad, la protección contra los atropellos y vejámenes, el derecho a no ser desplazado o a no ser involucrado en las dinámicas del conflicto y, eventualmente también, la solicitud de apoyo a organismos de justicia y derechos humanos nacionales e internacionales. Emerge un discurso sobre la guerra como el mal radical, y de la paz como el bien público por excelencia, como el propósito colectivo más importante y significativo; un discurso sobre la guerra que parece evitar hablar de sus causas, sus operadores, sus aliados y beneficiarios, y sobre una paz que constituiría el acto fundacional de un nuevo orden donde el pasado caótico debería quedar en el olvido.

16 Mauricio García. *Sociedad de emergencia, acción colectiva y violencia en Colombia*. Bogotá, Defensoría del Pueblo, Asidi, 2005, p. 49.

2.2 Los dilemas y ambigüedades de la retórica pacifista

Esta retórica pacifista, mediante la cual los subordinados se manifiestan en público y proyectan la imagen del ciudadano virtuoso, tiene un correlato que a veces no corresponde con ella, un elemento aparentemente paradójico que devela la subsistencia de la infrapolítica y de la estrategia del acomodamiento. En los relatos y narraciones de los afectados por la competencia de operadores se identifica el período anterior como un tiempo de paz, de tranquilidad, en el que podían vivir y trabajar sin sobresaltos y donde reinaba la tranquilidad y el orden;¹⁷ una suerte de mito de la edad dorada, pese a que en aquella época las localidades vivían bajo el control autoritario y discrecional de un operador armado que imponía su orden usando la fuerza, la intimidación y la violencia. Podría creerse que lo que se siente como pérdida no es la paz sino la seguridad precaria que ofrecía un operador sin competencia y frente al cual los repertorios de resistencia de la infrapolítica resultaban eficaces.

La retórica pacifista parece una demanda de seguridad, más que de derechos y de la presencia de una institucionalidad consolidada, de esta manera la seguridad sigue siendo el punto de anudamiento entre operadores de violencia y subordinados agraviados, y es lo que termina legitimando al nuevo operador cuando logra desplazar a sus competidores y consigue proyectar un imaginario de orden. Los subordinados aceptan dominaciones ilegales en la medida en que logren configurar un orden predecible; así resulta explicable, por ejemplo, que con frecuencia se escuche en entrevistas y narraciones de los pobladores que la paz retornó a sus lugares desde que los paramilitares dominan el entorno.

Estas paradojas entre los discursos y las prácticas quizá también permitan explicar por qué la retórica pacifista y cívica tan generalizada, coexiste sin contradicciones con el apoyo masivo a la propuesta gubernamental de seguridad democrática, cuyo propósito es conquistar la paz, pero con el instrumento de la guerra.

2.3 De los discursos pacifistas a la acción colectiva

Los subordinados que deciden quedarse en sus localidades exploran, con la ayuda y el acompañamiento de Ong y otros actores como la Iglesia y organismos internacionales, varias formas de resistencia organizada que les demanda el diseño de nuevas estrategias políticas, algunas novedosas pero de resultados no siempre eficaces. Así, han explorado alternativas como las declaraciones formales y públicas

17 Entrevistas a desplazados de Urabá y el Atrato Medio. Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, 1999.

de *neutralidad activa*,¹⁸ que implicó llegar a ciertos acuerdos con los operadores de violencia en competencia para su no intervención en los entornos locales; han explorado acuerdos contingentes en los cuales las transacciones y las intermediaciones son de mucha utilidad, pero de efectos desiguales: más exitosos en comunidades indígenas y más precarios y vulnerables en comunidades campesinas y pequeñas localidades, las experiencias de Urabá y del Atrato Medio son una muestra de esto.

Por ejemplo, el despliegue de la estrategia de neutralidad activa, con todas sus dificultades, fue dando paso a formas más orgánicas y autonómicas de resistencia. Rápidamente los pobladores que tomaron esta opción fueron concientes de que no bastaba con rechazar la presencia de los armados, sino que era necesario configurar un orden propio, un espacio delimitado y organizado desde el cual fuera posible garantizar su autonomía, su independencia y su autodeterminación; así se realizaron verdaderos pactos fundacionales cuya estrategia fue la de la resistencia civil. La historia de San José de Apartadó ilustra esta aventura democrática que costó vidas, dolor y sufrimiento, y que aún perdura a pesar del gran golpe que significó para los pobladores la ocupación militar de su territorio por orden del gobierno nacional.¹⁹ En contraste, una estrategia exitosa de resistencia civil desarrollada por las guardias indígenas del Cauca ha logrado mantener la autonomía y la independencia de sus comunidades, reconstruyendo y readecuando estrategias ancestrales de resistencia a la opresión.²⁰

Otras estrategias puestas en práctica fueron los *acuerdos y convenios de paz* con los operadores de violencia, acuerdos locales no oficiales promovidos por alcaldes y dirigentes políticos, quienes, en contravía de las órdenes del gobierno central, promovieron reuniones y diálogos con los operadores de violencia en un intento por ponerle límites a la barbarie y establecer compromisos con los perpetradores de violaciones al Derecho Internacional Humanitario; el caso de los alcaldes del oriente antioqueño en 2002 es un ejemplo de ello. En los barrios periféricos de grandes ciudades como Medellín también se desarrollaron algunos pactos de no agresión

18 La experiencia de algunas localidades de Urabá y del Atrato Medio puede resultar ilustrativa, al respecto véase: María Teresa Uribe de Hincapié. "Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó". En: Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (editores). *Emancipación social y violencia en Colombia*, *Op. cit.*, pp. 75-119.

19 *Ibid.*

20 Ariel Sánchez. "Guardias indígenas del Cauca". En: Mauricio García. *Sociedad de emergencia. Acción Colectiva y Violencia en Colombia*. Bogotá, Defensoría del Pueblo, Asidi, 2005, pp. 60-78.

promovidos por los curas párrocos y con el respaldo solidario de los pobladores: pactos entre bandas, milicias y otras organizaciones delincuenciales, con resultados positivos pero transitorios.²¹ El dominio paramilitar de esta ciudad desde mediados de 2004, prácticamente refuncionalizó estos pactos y rearticuló los pequeños y medianos operadores de violencia al dominio de un solo depredador; en otros casos, estos pactos de paz fueron promovidos por dirigentes comunitarios y en algunas oportunidades contaron con la presencia de funcionarios públicos y con su compromiso —no siempre cumplido— de realizar algunas inversiones en los entornos barriales.

Estas estrategias de acción colectiva están atravesadas por un eje común, las micronegociaciones, los acuerdos contingentes, las negociaciones transitorias, los diálogos y los encuentros cara a cara entre diversos actores. Aun en las situaciones más críticas, la estrategia del acuerdo para la supervivencia estuvo presente y se expresó a veces como transacción privada, a veces como negociación semipública, pero casi siempre por fuera del dominio institucional. Se trataba de acuerdos y negociaciones que fortalecieron una capa muy amplia de intermediarios, armados y desarmados, que situaron los pactos entre hostiles y subordinados, en la condición de estrategia pública por excelencia; de suerte que, ante la imposibilidad de contar con un orden institucional consolidado, lo más adecuado parece ser la negociación del desorden.²²

Las movilizaciones colectivas no siempre fueron pacíficas ni ordenadas, y en algunas oportunidades se apeló a acciones disruptivas como los paros, la toma de vías, la ocupación de iglesias y edificios públicos para reclamar del gobierno atención y protección a las vidas y bienes de los reclamantes. Éstas no siempre fueron promovidas por los subordinados o las organizaciones de la sociedad civil, sino por funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y actores institucionales de diferente nivel, para protestar por agravios graves y puntuales realizados contra poblaciones indefensas, o por el uso de prácticas denominadas *terroristas*. Además, no todas las acciones colectivas partieron de iniciativas sociales o gubernamentales; algunas

21 Ana María Jaramillo *et al.* *Op. cit.* Véase también: Francisco Gutiérrez Sanín y Ana María Jaramillo. *Op. cit.*

22 La expresión “negociación del desorden” es tomada de Fernando Escalante Gonzalbo, aunque él alude a este proceso como negociación de la desobediencia. Véase: Fernando Escalante Gonzalbo. *Ciudadanos imaginarios*. México, El Colegio de México, 1993, pp. 43-48.

fueron promovidas de manera directa por operadores de violencia, tanto de la guerrilla como de las agrupaciones paramilitares.²³

Lo importante de todo ello es el efecto que las movilizaciones colectivas pueden tener en la dinámica de los conflictos, pues las acciones públicas de esta naturaleza están develando —a su manera y con todas las limitaciones que tienen— escapes a controles autoritarios, formas de manifestar inconformidad y descontento, estrategias de resistencia cuyo efecto demostrativo se expande y convoca acciones similares en otros lugares del país; las Comunidades de Paz y las Asambleas Constituyentes en algunos municipios son casos paradigmáticos. Surgen también nuevas organizaciones de los subordinados y agraviados, aglutinados en torno de sus heridas morales y sus sufrimientos, tales como organizaciones de desplazados, de víctimas del conflicto armado, de madres de desaparecidos y asesinados (como las madres de La Candelaria, en Medellín), de familiares de secuestrados; y lo que es más importante, se configuran redes que, desde lo local, logran cobertura nacional y apoyo internacional, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras.

La retórica pacifista y las acciones colectivas desplegadas a partir de la escenificación de la disputa entre operadores de violencia, expresan formas de resistencia puestas en público que a veces logran abrir fisuras y grietas tanto en el aparato institucional, como en las estructuras de dominación de los operadores de violencia. Podría afirmarse que las acciones colectivas y las organizaciones sociales que surgen de allí están creando nuevas estructuras de oportunidades²⁴ que pasan a ser aprovechadas por otros actores sociales en el contexto nacional, sin embargo no significan todavía un desafío directo a los operadores de violencia ilegales o legales, ni a sus dominios autoritarios. Se trata de retóricas y acciones colectivas bifrontes que combinan de una manera magistral el discurso ciudadano y cívico²⁵ en unos espacios, con el discurso oculto de la infrapolítica en otros; que entran y salen de la legalidad, que llegan a microacuerdos con diversos tipos de operadores de violencia y sus intermediarios, que acuden a pactos paradójicos con actores que virtualmente serían

23 Un balance sobre la acción colectiva contra la violencia y la guerra de los años más recientes se encuentra en: María de la Luz Vásquez. “Dinámicas de resistencia al conflicto armado colombiano”. En: Mauricio García. *Sociedad de emergencia. Acción Colectiva y Violencia en Colombia. Op. cit.*, pp. 38-59.

24 Sobre el concepto de estructura de oportunidades véase, entre otros: Sidney Tarrow. *Op. cit.*, pp. 29 y ss.

25 La retórica ciudadana y los proyectos pedagógicos con esta orientación son de una gran amplitud. Como un ejemplo véase: Fundación Presencia. *Proyecto ciudadano. Hacia la construcción de una cultura ciudadana*. Bogotá, 2004.

los enemigos por combatir y denunciar. Precisamente, esa combinatoria de estrategias de resistencia y de discursos bifrontes, así como la rapidez para cambiar y readecuar las estrategias, para moverse en diferentes orbitas con lógicas y propósitos distintos, es lo que les ha permitido a los subordinados sobrevivir y resistir las dominaciones de actores autoritarios legales e ilegales.

Esta combinación de estrategias, salvo en casos puntuales, no encarna rebeldías emancipatorias, tampoco acciones ciudadanas cívicas y legales, no es propiamente pacífica aunque esté sustentada en una retórica que sí lo es, no se corresponde con la moral pública y la obediencia a la ley divulgada por el Estado, sino más bien con una economía moral y una noción de justicia propia de los oprimidos; es pactista y transaccional, poco ortodoxa y muy desafiante, pero ha sido el resultado de un aprendizaje largo y doloroso que les ha permitido a los subordinados no sólo sobrevivir, sino aprovechar las fisuras y las grietas de los autoritarismos verticales y crear transversalidades en el orden social institucional y en las dinámicas del conflicto.